



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2.020), 17:15 horas.

Radicado	08001-33-33-014-2020-00194-00
Medio de control o Acción	Habeas Corpus
Demandante	Luis Miguel Yopez
Demandado	Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla
Juez	Guillermo Osorio Afanador

I. PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a decidir la acción de Habeas Corpus presentada el día 30 de octubre de 2020 en la Oficina Judicial de Barranquilla, por la defensora pública doctora Nohelia Elizabeth Diaz Correa identificada con cédula de ciudadanía 1.047.379.465 en representación del señor **Luis Miguel Yopez**.

II.- ANTECEDENTES

- DEMANDA

Hechos Relevantes.

Indicó el solicitante por intermedio de su apoderada judicial, lo siguiente:

-Que fue capturado el día 03 de septiembre de 2019 por orden de captura por la presunta comisión del delito de Acto Sexual con menor de 14 años.

Narró que en consecuencia a su captura, la Fiscalía General de la Nación solicitó el 3 de septiembre de 2019 ante el Juez Quince Penal Municipal de Control de Garantías medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de esta ciudad, la Cárcel La Modelo de Barranquilla. Solicitud que tuvo acogida por el juez, quien ese mismo día le impuso medida de aseguramiento y desde esa fecha su representado se encuentra privado de la libertad.

-Expuso que el escrito de acusación se presentó el 13 de noviembre de 2019 correspondiéndole el conocimiento del proceso al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, y que el día 12 de febrero de 2020 se realizó la acusación del señor Luis Miguel Yopez con la asistencia de Defensa y Fiscalía, citándose a audiencia preparatoria el día 24 de marzo de 2020, en cuya fecha no se tuvo ingreso a los juzgados con el objeto de realización de la audiencia por el tema del cierre de los Juzgados por la Pandemia, pero tampoco se convocó a audiencia virtual por parte del Juzgado.

-Indicó que ha solicitado en varias ocasiones la carpeta digital de su representado, pero le señalan que no la encuentran en el despacho pese a haberla buscado. y que en razón de que, desde la fecha de presentación de acusación (13 de noviembre de 2019) hasta esta fecha (30 de octubre de 2020) han transcurrido aproximadamente 312 días, término que excede los 240 días que exige el artículo 317 numeral 5, del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004). Adujo además que si contabilizan los términos desde la fecha de la última audiencia (12 de febrero de 2020) hasta esta fecha (30 de octubre de 2020) se tiene que



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

han transcurrido aproximadamente 244 días de privación de la libertad sin que se haya convocado siquiera a audiencia preparatoria y mucho menos a la de Juicio Oral. En ese sentido señala que los términos se encuentran vencidos y procede la libertad inmediata.

Indicó además que por el vencimiento de los términos legales para la realización de la audiencia de juicio oral, sin que se hubiere realizado aún la audiencia preparatoria, solicitó audiencia de vencimiento de términos ante el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. Asimismo expuso que la audiencia de vencimiento de términos fue solicitada el 09 de octubre de 2020, se fijó fecha para el 21 de octubre de 2020, a las 3:30 pm, y le correspondió al Juzgado 18 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla.

Narró la apoderada judicial del solicitante que llegado el día y la hora para la realización de la audiencia se comunicó con el Juzgado a través de email y whatsapp con la secretaria y le indicó su disposición para la realización de la audiencia, aproximadamente a las 5:45 señaló la secretaria, que revisadas las notificaciones, se observó que no se notificó a la denunciante en tanto, la misma ya no reside en la dirección anotada, y que iba a aplazar la audiencia para otra fecha.

Expuso que el juzgado 18 Penal Municipal le ordenó mediante oficio 360 de 23 de octubre de 2020 la publicación de un aviso en un periodico de amplia circulación de la ciudad como requisito para la celebración de la audiencia, por lo cual manifestó a través de memorial, que estos aviso nos onerosos y que el usuario de la Defensoría se encuentra hace más de un año privado de la libertad y no tiene para costearla.

Indicó que se está produciendo un perjuicio irremediable frente a su representado, toda vez que se le está prolongando la privación de su libertad, pese a que tiene a favor un vencimiento de términos.

Adujo que el 29 de octubre de 2020 acudió ante el juez con el objeto de iniciar la audiencia aplazada y nuevamente se ordenó el aplazamiento de la diligencia, señalando que ordenaría fijar un aviso en la página de la rama frente a lo cual, la apoderada interpela, indicando que no se encontraba de acuerdo. Manifestó además que el Juez no dio traslado a ningún recurso frente a su decisión, sin embargo, en el acta enviada señala que no hubo recurso.

Narró que el Juez de Control de garantías no se ha referido a la solicitud de libertad por vencimiento de términos incoada, sino que, frente a la audiencia de la denunciante no ha querido escuchar petición de vencimiento de términos elevada y que en ambas ocasiones, tampoco la Fiscalía, que ha sido notificada, ha comparecido. dijo que a la defensa no le es obligatorio esperar la próxima fecha que de forma arbitraria ha impuesto el juez, toda vez que se está desconociendo abiertamente la ley que regula esta materia so pretexto de garantista, se está vulnerando los derechos fundamentales y procesales del usuario de la defensoría pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 del código de procedimiento penal. "...Cuando deban adoptarse decisiones que se refieran a la libertad provisional del imputado o acusado el funcionario dispondrá máximo de tres día hábiles para realizar la audiencia respectiva" y el juez ha aplazado la diligencia hasta en 15 días, por lo que adujo además que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la habilita para solicitar la presente acción constitucional y que el Juez de Habeas Corpus decida la libertad de su representado.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

III. ACTUACION PROCESAL

Repartida la acción constitucional de Hábeas Corpus el día de ayer viernes 30 de octubre de 2020 a las 7:40 P.M., por parte de la Oficina de Reparto de Barranquilla y entregado a este despacho a las 7:55 PM, éste funcionario inmediatamente aprehendió el conocimiento de la acción y mediante auto de esa misma fecha, dispuso adelantar el trámite de la presente petición de Habeas Corpus.

Fue solicitado al **Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla**, para que remita en el término de dos (2) horas, contadas a partir del recibo del correspondiente oficio, un informe relativo a las actuaciones adelantadas por su despacho con motivo del proceso penal que se sigue contra el señor LUIS MIGUEL YEPES con C.C. No. 1.046.700.056, dentro del proceso bajo el CUI 080016001067201900025 .-, e igualmente informara el trámite adelantado respecto de la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el señor LUIS MIGUEL YEPES y aportara el audio de la audiencia realizada el día 29 de octubre de 2020 con ocasión de la solicitud de libertad por vencimiento de términos.

Asimismo, se solicitó al **Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla**, para que remitiera en el término de dos (2) horas, contadas a partir del recibo del correspondiente oficio, un informe relativo a las actuaciones adelantadas por su despacho con motivo del proceso penal que se sigue contra el señor LUIS MIGUEL YEPES con C.C. No. 1.046.700.056, dentro del CUI 080016001067201900025 .-

Igualmente se solicitó al Director de la Cárcel Modelo de Barranquilla, para que de manera inmediata y con destino al expediente de la referencia, certifique si el señor **LUIS MIGUEL YEPES** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.046.700.056 se encuentra privado de la libertad en ese establecimiento carcelario. En caso afirmativo, desde qué fecha, a cargo de que autoridad, por cual delito y en qué estado se encuentra su proceso, debiendo remitir copia de la cartilla biográfica respectiva.

Por último se ordenó Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN, para que de manera inmediata y con destino al expediente contentivo de la acción de habeas corpus, certificara si el señor LUIS MIGUEL YEPES, con C.C. 1.046.700.056, de Barranquilla (Atco.), tiene anotaciones, antecedentes penales y/o órdenes de captura.

El Despacho en el auto admisorio no dispuso sobre la entrevista de la persona privada de la libertad, en primer término teniendo en cuenta las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus SARS-COV-2, que causa la enfermedad COVID-19, las instrucciones dadas por el Consejo Superior de la Judicatura con igual propósito, lo establecido por el segundo inciso del artículo 5° de la Ley 1095 de 2006 y además por que conforme a lo narrado en la solicitud no se infiere que deban, determinarse las condiciones personales en que se encuentra el retenido respecto de su vida e integridad personal.

Informes recibidos dentro del trámite constitucional

Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

El mencionado despacho, por conducto del correo electrónico institucional, suscrito por su titular, mediante oficio sin número, de fecha 30 de octubre de 2020, emitió el informe solicitado, manifestando que el día 21 de octubre correspondió a su despacho por reparto sistemático, la solicitud de audiencia preliminar de Libertad por Vencimiento de Términos a favor de “Luis Miguel Yepez Jiménez (sic)” allegada por su defensa la doctora NOHELIA ELIZABETH DIAZ CORREA. Indicó que el despacho se encontraba realizando otra audiencia a la hora señalada, pero antes de iniciar la misma se verificaron los presupuestos de ley y se encontró que la representante de la víctima, la cual estaba relacionada en la solicitud señora MILENA PATRICIA YEPEZ JIMENEZ no fue notificada en la dirección aportada ya que en el reporte de guía por parte de la empresa de servicios postales 4-72, informó que no residía en esa dirección, por lo que el despacho ordenó a la peticionaria publicar un aviso en un periódico de amplia circulación de la ciudad para comunicarle a la víctima la realización de la audiencia, y se aplazó para el día 29 de octubre de 2020 a las 2:00 p.m., de manera virtual.

Expuso el accionado que el día de ayer 29 de octubre de 2020 se instaló la audiencia de libertad por vencimientos de términos a favor del señor LUIS MIGUEL YEPEZ, se le solicitó a la defensora Dra. NOHELIA DIAZ CORREA información sobre la notificación de la víctima la cual manifestó que no la había hecho por falta de recursos económicos, por lo cual el despacho dispuso nuevamente aplazar la audiencia para el día 04 de noviembre de 2020 a las 2:00 p.m., ordenando por secretaria fijar un aviso en los canales dispuestos para ello del juzgado como en la cuenta de twitter y la página web de la rama judicial, y también se le ordenó a la delegada fiscal notificar a las víctimas en la dirección que reposa dentro de la carpeta del proceso de la referencia.

Indicó que la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos no se celebró el día previsto, dado que no fue notificada la víctima en debida forma, a la cual no se les puede cercenar el derecho de participar o enterarse de la realización de la audiencia, pues de hacer la audiencia sin notificar o enterar a la víctima de la misma se le vulneraría el debido proceso. Así las cosas el aplazamiento para el próximo 4 de noviembre de 2020 no ha sido ningún capricho o dilación injustificada, por resolver el asunto, como lo hace ver malintencionadamente la defensora pública.

Resalta que debe recordarse que sobre estas circunstancias ya la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, en decisión del 19 de marzo de 2015, radicación No. 45620, “...la presencia en la audiencia de los representantes de la Fiscalía y de las víctimas, no se tornaba obligatoria, bastando con garantizar a ellos su posible intervención en la audiencia a través de la oportuna notificación de la fecha de su celebración. De allí que sólo en el evento de no haber sido notificados o de presentación por parte de ellos de una excusa válida para el juez, podía suspenderse la audiencia en razón de su ausencia, circunstancias que no se desprenden de la constancia secretarial de no realización de la audiencia..”

Finalmente señala que con fundamento en esas precisiones jurisprudenciales y legales no estaban dado los presupuestos para realizar la audiencia preliminar.

Dentro de la respuesta enviada, la agencia judicial accionada solicitó la compulsión de copias disciplinarias ante el Consejo Superior de la Judicatura a la doctora Nohelia Díaz Correa, en tanto, actuó de manera temeraria, por solicitar la acción constitucional, cuando ya se encontraba notificada de la fecha de la audiencia la cual se aplazó para su debida notificación en garantía a los derechos de las víctimas del delito sexual. Culminó diciendo



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

que la prontitud con que pretende un pronunciamiento la defensora no puede pasar por encima de garantías y derechos de todas las partes e intervinientes dentro del proceso.

Juzgado Sexto Penal del Circuito Judicial de Barranquilla.

Hasta el momento de elaborarse el presente fallo aún no había remitido la información requerida.

Policia Nacional - Seccional de Investigación Criminal MEBAR

Hasta el momento de elaborarse el presente fallo aún no había remitido la información requerida.

Director Cárcel de Mediana Seguridad de Barranquilla

En oficio CMSBA AJUR 301, de fecha 31 de octubre de 2020, remitido al correo electrónico institucional el mismo día, el Asesor Jurídico del área jurídica de la Cárcel de Media Seguridad informa que el PL Luis Miguel Yepez identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.046. 700.056, ingresó a las instalaciones el día 13/09/2019 con medida de aseguramiento intramural, impuesta por el Juzgado 15 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, encontrándose recluso en la actualidad. certifica que la información se encuentra soportada en el sistema SISIPPEC WEB, por lo cual aporta cartilla bibliográfica.

IV.- CONSIDERACIONES

- PROBLEMA JURÍDICO

El interrogante a resolver, conforme a lo reseñado en el escrito de *habeas corpus* y las informaciones recibidas dentro de este trámite, es:

¿Resulta procedente en éste caso, ordenar la libertad inmediata del solicitante, pese que su abogada defensor, elevó solicitud de libertad por vencimiento de términos, la cual se encuentra pendiente de resolución por parte del Juez competente.?

- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Consagración Constitucional y Legal.

En relación con la libertad personal, el artículo 28 de la Constitución Política dispone:

“Artículo 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”

Para garantizar el goce del derecho fundamental a la libertad personal, el constituyente primario dispuso que en la Constitución Política se previera en su artículo 30, la acción de *Hábeas Corpus*, la cual ha sido normativamente diseñada con términos más cortos para su decisión y puede ser intentada en todo momento y lugar, aún durante los estados de excepción¹, ante cualquier autoridad judicial.

Es así como dicha norma consagra:

“Artículo 30.- Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”

En desarrollo de la anterior disposición, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria No. 1095 del 2 de noviembre de 2006, ocupándose de definir la acción de *Hábeas Corpus* en los siguientes términos:

“Artículo 1º.- Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas Corpus no se suspenderá, aún en los Estados de Excepción”

Por su parte, la Corte Constitucional, al llevar a cabo la revisión previa del proyecto de Ley Estatutaria 1095 de 2006, señaló:

“5. El Hábeas corpus como instrumento de protección integral de la persona privada de la libertad.

El estudio sistemático de las normas que integran la Constitución Política de 1991, muestra el interés especial del constituyente por amparar a la persona humana ante los abusos que contra ella puedan cometer tanto las

¹ El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1095 establece que el hábeas corpus no se podrá suspender, ni siquiera en los estados de excepción.

“Este mandato resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta Política, pues en él se consagra que el derecho-acción podrá ser ejercido en todo tiempo. En esta medida, el legislador estatutario precisa que inclusive en circunstancias especiales, como las derivadas de la declaratoria de alguno de los estados de excepción durante los cuales los derechos, las garantías y las libertades públicas podrían ser razonablemente limitados, el hábeas corpus no encuentra límite temporal para su ejercicio”. (Sentencia C 187 de marzo 15 de 2006).



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

autoridades públicas, como también los particulares.² Así, desde el mismo preámbulo, los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente expresaron que la Carta sería expedida para asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

...(...)

Armonizando con los anteriores postulados, el artículo 30 de la Constitución de 1991 dispone, que quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.

En efecto, el hábeas corpus es la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que reconoce en forma expresa que toda persona es libre, así como que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Dicha disposición consagra además, que la persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente dentro del término que establezca la ley”³

A su turno el Consejo de Estado señala que la figura constitucional de *Hábeas Corpus* se ha edificado sobre la base y con el propósito de conjurar la arbitrariedad de ciertas autoridades que deciden privar de la libertad a algunas personas en contravía de los preceptos constitucionales y legales que regulan la materia, de modo que la intervención de un juez de la República pueda poner fin a ese proceder.

De lo anteriormente expuesto es una premisa indiscutible para las Altas Cortes que: el *Hábeas Corpus* procede en dos claros supuestos:

- i) Cuando la privación de la libertad es arbitraria, es decir cuando se transgreden las garantías constitucionales o legales; esto significa que si a lo largo del procedimiento se han respetado las garantías que establece el ordenamiento jurídico para la respectiva detención, la acción de *Hábeas Corpus* se torna improcedente. (v.gr. cuando existe decisión judicial en firme dirigida a soportar la medida restrictiva).
- ii) Cuando la privación de la libertad se prolonga indebidamente en el tiempo, como cuando capturada la persona no es puesta a disposición de la autoridad judicial competente dentro

²ⁿ Acerca de la protección respecto de particulares, el artículo 86 de la Carta Política permite que la acción de tutela, que implica amenaza o vulneración a derechos fundamentales, pueda ser ejercida en determinados casos”.

³ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C 187 de marzo 15 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

del término establecido legalmente o cuando se retiene sin fundamento jurídico alguno (providencia judicial ejecutoriada) a una persona por fuera de los términos legales.

El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal que el solicitante aduce debe ser aplicado a su caso concreto, es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.
5. <Numeral corregido mediante Fe de Erratas, el nuevo texto es el siguiente:> Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.
6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.

PARÁGRAFO 1o. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

PARÁGRAFO 2o. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad.

PARÁGRAFO 3o. Cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo, los días empleados en ellas.

Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317.”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Por su parte el artículo 1° de la Ley 1786 de 2016, “por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015, señala:

“**ARTÍCULO 1o.** Modifícase el artículo 1o de la Ley 1760 de 2015, el cual quedará así:

Artículo 1o. Adiciónense dos párrafos al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:

PARÁGRAFO 1o. Salvo lo previsto en los párrafos 2o y 3o del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo.

En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías, para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad contemplado en este artículo.

PARÁGRAFO 2o. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.”

- De la improcedencia de la acción de Habeas Corpus

La acción de hábeas corpus es de naturaleza excepcional y residual, esto es, su ejercicio está condicionado a la inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de la libertad del detenido.

Ciertamente, las acciones de garantía o de amparo –dentro de las cuales se encuentra la de hábeas corpus-, por su naturaleza residual y sumaria, sólo proceden frente a las arbitrariedades evidentes y palmarias, en el entendido de que las actuaciones que en menor grado se consideren irregulares tienen que resolverse en el interior del proceso, por los cauces ordinarios, es decir, mediante la utilización de los medios o recursos ordinarios que la ley procesal establece en cada caso.

Esta acción no es una figura alternativa o sucedánea para debatir aspectos que se deben confrontar en desarrollo del proceso penal en relación con los hechos que se investigan, el marco temporal y situacional de su ocurrencia o las causales de excarcelación, pues por ser un trámite excepcional está limitado a la protección de la libertad y de los derechos fundamentales que se deriven de ella como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas, como lo concluyó la Corte



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Constitucional en sentencia C-187 de 2006 en el control previo realizado a la Ley Estatutaria de hábeas corpus.

Precisamente, al constituir un medio excepcional de protección de la libertad no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos ordinarios, al punto que le está vedado cuestionar situaciones de fondo o de responsabilidad penal del procesado, debatir asuntos probatorios y de valoración, porque sólo se trata de una revisión de los aspectos formales o circunstanciales que rodearon la afectación de la libertad.

Por lo mismo, no puede tener un alcance que desnaturalice el esquema previsto legalmente para el adelantamiento del proceso penal, ni es dable que sea utilizado como medio para desplazar o sustituir al funcionario judicial penal que conozca del asunto en relación con el cual se demande el amparo de la libertad.

En relación con este tópico la Corte Suprema en Sentencia de 15 de agosto de 2017 (Rad. No. AHL5217-2017), destacó que:

*“...las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, **deben tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial, cuando es en éste en que se ha dispuesto la privación de la libertad, sin que con dicho propósito resulte viable, en principio, acudir a la invocación del habeas corpus, pues el ordenamiento confiere variados mecanismos, tales como la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de libertad por vencimiento de términos** ... por eso se reitera que a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado, deben elevarse al interior del proceso penal y no a través del mecanismo constitucional de habeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario⁴”* (Resaltado fuera de texto).

Y, si bien al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos que son propios del proceso penal, sólo sería dable y legítima su intervención como garante de los derechos **cuando se advierta una ostensible vía de hecho**, esto es, un flagrante desconocimiento del orden jurídico de los jueces ordinarios o una interpretación grosera de la ley alejada de postulados razonables.

Similares consideraciones fueron expuestas por la Corte Suprema de Justicia en decisión de 18 de enero de 2012⁵:

*“En efecto, de tiempo atrás se ha precisado que este mecanismo es de índole extrasistémica, es decir, **sólo procede cuando intentados los mecanismos ordinarios de protección de derechos fundamentales reglados por el legislador al interior de los trámites, no se ha conseguido su condigno amparo, pues de lo contrario se convertiría en un medio para violentar el debido proceso propio de***

4

⁵ Adoptada dentro del proceso No. 38147, Sala de Casación Penal, Magistrada Ponente: María del Rosario González Muñoz.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

las actuaciones judiciales, con lo cual se quebrantaría el principio de independencia y autonomía judicial, al pretender, en este caso, dilucidar un tema del exclusivo resorte de los funcionarios que de manera expresa conocen de él” (Resaltado fuera de texto).

En síntesis, sólo en la medida en que se haya acudido a los mecanismos ordinarios de protección de los derechos fundamentales, y no se haya conseguido el amparo del derecho a la libertad que se considera conculcado, procederá su protección por la vía de la acción de habeas corpus, de lo contrario, resulta forzoso que la misma sea rechazada por improcedente, pues de no hacerse así, se estarían invadiendo las competencias propias de la justicia ordinaria penal.

- CASO CONCRETO

El señor **Luis Miguel Yepes** actuando por intermedio de apoderada judicial, presentó ante la Oficina de Reparto de la ciudad de Barranquilla, por los medios electrónicos dispuestos para ello, acción constitucional de Habeas Corpus, solicitando que se ordene su libertad inmediata, toda vez que el Juzgado Dieciocho Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, hasta el momento no ha realizado la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, considerando que en su caso se reúne el requisito para que a su favor sea aplicado lo previsto en el numeral 5° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.

- Hechos Probados

Según la información suministrada por el asesor jurídico de la Cárcel de Mediana Seguridad de Barranquilla y de la cartilla biográfica anexa, se logra establecer que en efecto el solicitante Luis Miguel Yepes fue capturado el día 03 de septiembre de 2019 e ingresó al centro de reclusión el 13 de septiembre de 2019, sindicado del delito de Actos sexuales con menor de catorce años agravado y a la fecha aún se encuentra recluido en dicha cárcel.

El 12 de febrero de 2020 se realizó audiencia pública de formulación de acusación en contra del señor Luis Miguel Yepes, por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años, diligencia llevada a cabo por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, la cual contó con la presencia de la doctora ELizabeth Arevalo Garibello, Fiscal CAIVAS, Nohelía Díaz Correa, Defensora Pública, y el imputado Luis Miguel Yepes quien fue puesto de forma virtual por la Cárcel Modelo de la ciudad, y en la que se fijó fecha para audiencia preparatoria, para el 24 de marzo de 2020.

Conforme con la información remitida por el titular del Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, se logra establecer que en efecto en dicho despacho se tramita la solicitud de libertad por vencimiento de términos en favor del señor **Luis Miguel Yepes**, presentada por intermedio de apoderada judicial, bajo el CUI 080016001067201900025, así mismo se observa el acta de fecha el 21 de octubre de 2020, en la que se registra que se dio inicio a la audiencia virtual siendo las 5:41 p.m. y que se aplazó para el día jueves 29 de octubre de 2020 a las 2:00 p.m., en razón a que el despacho se encontraba realizando otra audiencia a la hora señalada y que la representante de víctima con residencia en el Barrio 7 de Abril de Barranquilla no fue notificada, en tanto se reportó por parte de la empresa de courier, que no reside en esa dirección.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Se registra además la orden proferida por el Juez dirigida a la peticionaria, en el sentido que publique un aviso en un periodico de amplia circulacion de la ciudad de la realización de esta audiencia de libertad por vencimientos de términos a favor de LUIS MIGUEL YEPES con C.C. No. 1.046.700.056 bajo radicado 080016001067201900025, la cual se realizará el día 29 de octubre de 2020 a las 2:00 p.m., de manera virtual de conformidad al PCSJA20-11528 del 22 de marzo de 2020, para lo cual debera ingresar al link virtualidadcdsq.com

Por otra parte se observa el acta de fecha 29 de octubre de 2020, de la audiencia de libertad por vencimiento de términos, la cual registra que estaba programada para las 2:00 p.m. de ese día y en el acápite de la decisión registra que la audiencia fue aplazada para el día 04 de noviembre de 2020, en tanto no fue notificada en debida forma.

El acta anterior guarda coherencia con lo registrado en el audio de la audiencia celebrada el día 29 de octubre de 2020 la cual inició a las 4:13 P.M., y contó con la presencia de la defensora del procesado. Evidencia aportada por el Juzgado 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, que registró que ante la ausencia de la víctima o su representante y al desconocerse su actual domicilio, el señor Juez 18 Penal Municipal, fundamentado en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, que prevé citar a todas las partes y que para dicha audiencia se requiere que la víctima esté enterada, ordenó publicar un aviso en la página web de la Rama Judicial y que Secretaría tomara atenta nota de su publicación. Ordenó además, requerir por segunda vez a la Fiscalía General de la Nación para que realice la notificación de la víctima de acuerdo a la información que ella tenga, y se dispuso programar nueva fecha para la realización de la audiencia.

Luego de impartida la orden, la defensora del procesado solicita el uso de la palabra y manifiesta que no comparte la decisión de aplazar la audiencia, ante lo cual el juez reitera que la decisión se toma en garantía de todos los intereses de los intervinientes, tanto del procesado como de la víctima y por eso se aplazaba la audiencia para el miércoles próximo a las dos (2:00 PM) de la tarde, decisión que se notifica a la defensora, dándose por terminada la audiencia a las 4:21 P.M.

Del anterior informe, de las actas y demás documentos y el audio que con éste se anexa, se tiene que la Audiencia de vencimiento de términos ha presentado dos aplazamientos, el día 21 de octubre de 2020, en razón a que el despacho se encontraba realizando otra audiencia y a la falta de notificación de la víctima, y el día 29 de octubre de 2020, que se registró en el acta de la audiencia su aplazamiento en razón a que la víctima, no fue notificada en debida forma, por lo cual se ordenó fijar por secretaría un aviso en los canales de internet y a la Fiscalía notificar a la víctima en los datos consignados en la carpeta del proceso de la referencia.

- Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico

Pues bien, estudiada la solicitud de habeas corpus, los informes allegados, las pruebas recaudadas, las normas aplicables y de cara a la jurisprudencia que fue citada en el acápite respectivo, encuentra el Despacho que ha de ser denegada la solicitud presentada, tal como pasa a explicarse.

Como se expuso en el acápite de fundamentos normativos, la acción de hábeas corpus ha sido entendida como el derecho que le asiste a quien estando privado de su libertad y



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

creyere estarlo ilegalmente, para que invoque ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, la tutela de su libertad personal en dos eventualidades: i) cuando la aprehensión se lleva a cabo con desconocimiento de las formalidades de orden constitucional y legal a las que se somete el cumplimiento de una orden judicial de privación de la libertad y, ii) cuando ejecutada la captura se extiende en el tiempo más allá de lo debido.

Sin embargo, también se ha sostenido que dicha acción es residual, lo que significa que su ejercicio está condicionado a la inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de la libertad del detenido, es decir, mediante la utilización de los medios o recursos ordinarios que la ley procesal establece en cada caso. Ello comoquiera que al constituir un medio excepcional de protección de la libertad no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos ordinarios, salvo que se advierta una ostensible vía de hecho, evento en el cual sería legítima la intervención del juez constitucional.

Teniendo claro lo anterior y descendiendo al caso concreto, se advierte del material probatorio obrante en el expediente, que al señor **Luis Miguel Yepez** se le sigue un proceso penal por el presunto de Actos sexuales con menor de catorce años ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, proceso que se encuentra para iniciar la audiencia preparatoria.

También se encuentra probado, que la defensora del señor Luis Miguel Yepez, presentó el día 09 de octubre de 2020, solicitud de libertad por vencimiento de términos, solicitud que se tramita ante el Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal de Control de Garantías.

Dicha solicitud, es en efecto, el mecanismo que establece la ley penal, para que dentro del proceso que se adelanta, se solicite la libertad inmediata, cuando quiera que se considere que las autoridades encargadas de decidir un determinado asunto, han sobrepasado los términos legales para ello.

Frente a tal petición, no es procedente que este Despacho dentro del trámite de Habeas Corpus, entre a pronunciarse en torno a la misma, habida cuenta que las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial que hoy conoce el Juzgado Dieciocho (18) Penal de Control de Garantías, autoridad que tiene a su cargo la resolución de dicha solicitud, para lo cual ya tiene señalado fecha para la audiencia para el próximo 04 de noviembre hogaño y que se encuentra notificada a los interesados.

En efecto, recuérdese que, según la jurisprudencia, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado, deben elevarse al interior del proceso penal y no a través del mecanismo constitucional de habeas corpus, y en tal medida no resulta procedente que se entre a estudiar de fondo si en efecto se cumplieron o no los términos con que cuenta la autoridad judicial para anunciar el sentido del fallo.

Significa lo anterior que, al margen de lo que pueda considerar el Despacho en torno a la oportunidad o extemporaneidad de las actuaciones judiciales que se han surtido dentro del proceso penal, no es esta instancia la apropiada para discutir tales actuaciones, en tanto,



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

será el juez de conocimiento quien deba decidir si la petición presentada por la defensa tiene o no vocación de prosperar.

Ahora bien, existe una excepción a la regla general según la cual *“el juez constitucional no puede inmiscuirse en los asuntos propios del proceso penal”*, y es la verificación de una ostensible vía de hecho, con lo cual si se habilitaría para que el juez entre a estudiar de fondo una determinada solicitud de libertad; sin embargo, en el presente caso, no se advierte prima facie que se hubiere configurado un flagrante desconocimiento del orden jurídico por parte del juez que tenía a su cargo la resolución de la solicitud de libertad presentada por el accionante, así como tampoco una interpretación grosera de la ley.

Así las cosas, a juicio de este Despacho, la presente acción no resulta procedente, en tanto se encuentra pendiente que sea resuelto por el juez competente, la solicitud de libertad por vencimiento de términos, quien determinará si se encuentran o no configurados los requisitos para que se acceda a la libertad inmediata del accionante, que según se advierte de las pruebas allegadas, la audiencia para tal propósito se encuentra programada para el próximo día miércoles 4 de noviembre.

Conclusión.

Dado que en el presente caso la medida de aseguramiento se encuentra vigente y que la libertad del señor **Luis Miguel Yepes** es un asunto que ya fue puesto en conocimiento ante la autoridad judicial competente, quien en próxima oportunidad se pronunciará en torno a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, y no habiéndose encontrado una ostensible vía de hecho que legitime la intervención de esta agencia judicial, se declarará la improcedencia del habeas corpus solicitado.

V. DECISION :

En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Catorce Administrativo Oral de Barranquilla administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la acción de Habeas Corpus impetrada por el señor **Luis Miguel Yepes**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por el medio más expedito la presente providencia al solicitante señor **Luis Miguel Yepes**, para lo cual puede utilizarse el correo electrónico de la Oficina Asesora Jurídica de la Cárcel Modelo y a su defensora doctora Nohelia Elizabeth Diaz Correa a los correos electrónicos noheliaelizabethdiaz@gmail.com o nodiaz@defensoria.edu.co, o al numero whatsapp señalado en la solicitud.

TERCERO.- COMUNICAR del contenido de esta providencia al Juzgado Dieciocho (18) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, al Director del Establecimiento Carcelario La Modelo de Barranquilla, y a la agente del Ministerio Público delegada ante este Juzgado.

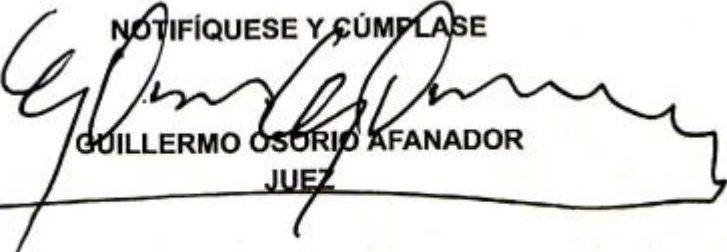


Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

CUARTO: ADVERTIR al accionante que la presente providencia podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1095 de noviembre 06 de 2006.

La impugnación debe remitirse al correo electrónico institucional de éste Despacho adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Se deja constancia de que esta providencia se terminó de elaborar a las 5:15 p.m del sábado treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ